

APELACION

Interpuesta en la Causa instruida en el Juzgado de Distrito de Oaxaca, contra D. Agustín Castañeda, por peculado.

Auto del C. Juez 1º suplente de Distrito.

Oaxaca de Juárez, Diciembre 11 de 73.

Con presencia de lo pedido por el Ministerio público últimamente, y por lo que de lo actuado resulta contra el ex-administrador principal de Correos, D. Agustín Castañeda, acusado principal de los delitos de peculado y falsedad, redúzcasele á prisión formal, librándose al efecto las órdenes correspondientes; sin perjuicio de providenciar lo mas que convenga respecto de los individuos que puedan resultar cómplices, y de proveer tambien en cuaderno separado lo relativo al aseguramiento de los intereses del fisco por el déficit que desde ahora aparece liquidado á su favor, y mas que se liquide en virtud del exhoito que se tiene expedido al Juzgado del Distrito Federal, dándose los avisos correspondientes al Tribunal Superior de Circuito y Ministerio de Justicia. Hágase saber en lo conducente, librándose al alcaide la copia respectiva y tomándose á su vez la media filiación del presunto reo.

El C. Juez 1º suplente de Distrito, lo decretó y firmó. Doy fé.—*Juan Ignacio Hagoaga*.—*Leolfo Sanloval*, secretario.

Pedimento del C. promotor fiscal.

C. Juez de Distrito.

El Promotor accidental, ante vd. dice: que D. Agustín Castañeda, diputado al Congreso del Estado, en su escrito fecha 18 del presente, pretende que ese Juzgado se declare incompetente para proceder en su contra por el delito de peculado, de que se le considera responsable por la falta de fondos habida en la Administración de Cor-

reos que estuvo á su cargo, mientras por el mismo Congreso no se declare haber lugar á formar la causa: á la vez interpone el recurso de apelación del auto de prisión formal que ese Juzgado pronunció en su contra, y que se ha ejecutado ya mediante la aprehensión y reclusión de dicho señor.

La cuestión aunque se promueve con el carácter de una declinatoria, no lo tiene realmente, por que el Sr. Castañeda, ni niega ni puede negar, que ese Juzgado tenga jurisdicción para conocer de la causa de peculado de que se trata, ni para proceder contra las personas comprometidas en ella; supuesto que los fondos cuya falta ha dado lugar á la formación del proceso, son pertenecientes á las rentas federales y sujeta su materia á la Justicia Federal. La cuestión versa sobre formas que en concepto del Sr. Castañeda se han omitido para decretar y ejecutar su prisión, en virtud de que el art. 83 de la Constitución del Estado, declara inviolables á los diputados del mismo, mientras no proceda la declaración de formación de causa; pero esta cuestión de meras fórmulas está resuelta ya, en el hecho de haberse decretado y ejecutado la prisión del Sr. Castañeda, pues aunque el auto relativo no haya dicho expresamente que un diputado del Estado, tratándose de delitos de la incumbencia de la federación, no goza de la inviolabilidad que le garantiza la Constitución particular, lo supone, y en tal caso, no tiene que ocuparse de ella nuevamente, puesto que las sentencias obligan no solo respecto de lo que mandan expresamente, sino tambien respecto de lo que suponen.

Si este Juzgado tomara en consideración la cuestión enunciada, le sería lícito resolverla de conformidad con lo pedido por Castañeda, y tal no puede ser, *porque los puntos sobre jurisdicción una vez resueltos, no pueden reformarse sino por el superior.*

Por tanto, pido que vd. se sirva admitir la apelación que el Sr. Castañeda interpuso del auto de prisión, y mandar elevar los

autos en testimonio al Juzgado de Circuito, para que se revise tanto el punto sobre la competencia, como el de prision formal.

Oaxaca, Diciembre 23 de 1873.—*Juan N. Bonilla.*

Sentencia del C. Juez de Distrito.

Visto este incidente promovido en escrito de fecha 15 del actual, por el acusado D. Agustín Castañeda, ex-administrador principal de Correos, en la causa instruida contra el ex-interventor D. Roman Robledo y socios por peculado y falsedad, sobre declinatoria de fuero sobre inhibicion del suscrito Juez, fundándose lo primero en que el propio Castañeda es diputado á la Legislatura del Estado, y por el art. 88 de la Constitucion particular del mismo, se concede fuero á los altos funcionarios de su clase, no pudiendo ser procesados por ningun delito, sin previa declaracion de la Cámara de haber lugar á la formacion de causa; y lo segundo, en que el personal de éste Juzgado tiene enemistad profunda y pública con el C. Lic. Francisco Carranza, abogado del acusado. Visto el pedimento del C. Administrador principal de Correos, como Promotor fiscal accidental por excusa del propietario y de los funcionarios que en el orden legal debían sustituirle, en cuyo pedimento manifiesta, que afectando el fuero alegado, solo la forma y no la esencia del procedimiento, y habiéndose violado ya en su concepto esa forma con la prision de Castañeda, por auto irrevocable, sin solicitar ántes la declaracion respectiva del Congreso, se admita la apelacion interpuesta de dicho auto, y se eleve el testimonio correspondiente al Tribunal Superior de Circuito, para que se sirva revisar á la vez, tanto el punto de competencia, como el de prision formal, haciendo punto omiso de la inhibicion pedida. Vista la citacion de ambas partes y cuanto de lo actuado resulta y ver, convino:

Considerando: que aunque la inhibicion

se pide en un otro, si del escrito, debe tratarse primero, por tocar al personal y no á la entidad del Juzgado; que ésta excepcion es improcedente en el estado actual del proceso, y la causa en que se apoya es ilegal é infundada,

Primero: porque habiéndose modificado la condicion de Castañeda en el curso de la causa, la intervencion actual de patrono ó abogado, es absolutamente ofensiva, á no ser con el carácter de defensor y previo el discernimiento respectivo.

Segundo: Porque no está comprendido entre las causas de recusacion de que tratan las leyes vigentes, ni menos en la de impedimento forzoso que señala la ley de 22 de Mayo de 1834 arts. 22 y 27 refiriéndose al art. 15 de la ley de 14 Febrero de 1826.

Tercero: porque la ley vigente, por lo demas en materia de exensas, es la del fuero comun de 4 de Mayo de 1857, que en sus arts. 144 y 153, otorga á los jueces la facultad de exensarse por justa causa segun su conciencia, y el suscrito Juez no usa de esa facultad, porque no estima justa ni cierta la causa alegada.

Considerando en cuanto á la declinatoria de fuero: que ella ha podido alegarse por el acusado, á pesar de la apelacion interpuesta, porque ambas se fundan en jurisdiccion que no se objeta y que se reputa improrogable, porque desde el principio se ha protestado contra ella, y por ser cuestion de derecho público.

Considerando: que no debiendo por ningun motivo suspenderse las diligencias del sumario, y refiriéndose los dos puntos del incidente á la jurisdiccion del Juez que suscribe, debe resolverse á la vez como corresponde al mas pronto término de la causa.

Considerando: que la competencia de este juzgado en la presente causa, está establecida por la ley de su creacion y sus concordantes, y sobre todo, por el art. 97, fraccion 3ª de la Constitucion de 5 de Febrero de 1857: que esta Carta obediendo en su

art. 13 todo fuero especial con escepcion del militar, establece en el art. 103 el llamado *fuero constitucional* para los altos funcionarios, que con toda claridad especifica, y en que no están comprendidos los diputados á las Legislaturas de los Estados; y finalmente, que en el art. 126 previene, que esa Constitucion, las leyes de la Union y los tratados internacionales, serán la Ley Suprema de la Nacion; y á ella deben arreglarse los jueces, á pesar de las disposiciones en contrario de las constituciones ó leyes de los Estados.

Considerando: que por lo expuesto es indudable que la mente de los legisladores del Estado, al sancionar el fuero para los altos funcionarios del mismo, en el art. 83 de su constitucion, se contrajo á los casos de su régimen interior, únicos en que podría hacerlo, segun los arts. 40 y 41 de la Carta Federal; y si otro fué su espíritu, exceptuando á sus funcionarios del fuero comun, y abocándose incidentalmente el conocimiento de los negocios de la exclusiva competencia de los Tribunales federales, esa disposicion es nula, por contravenir á las estipulaciones del Pacto Federal, (última parte del art. 40).

Considerando: que si los Estados de la federacion son acreedores respecto de los fueros y prerogativas de la Union, á la justa reciprocidad que garantiza su independencia y soberanía, así como el prestigio y mutua inviolabilidad de los altos poderes; esa cuestion de vital importancia para la perfeccion del sistema democrático, es de derecho público y constitucional y debe discutirse y resolverse por el Poder Legislativo de la Federacion, mas no por el Judicial, que no puede juzgar de las leyes, sino segun ellas, y guardarlas por duras y poco filosóficas que parezcan.

Considerando: por último, que no debe perderse de vista en todo caso, que los hechos que motivan este procedimiento tuvieron lugar mucho antes de que el Sr. Castañeda fuese electo diputado, y que el fue-

ro por su naturaleza odioso, debe restringirse, interpretando literal y estrictamente la ley... La Justicia Federal; con fundamento de lo expuesto y de las leyes y disposiciones citadas, declara:

Primero: no ha lugar á la inhibicion que se solicita del personal de este Juzgado.

Segundo: este mismo Juzgado se declara competente para proceder contra el acusado D. Agustin Castañeda, en la presente causa, y en consecuencia, no ha lugar á la suspension de las diligencias que á él se refieren y remision de lo actuado, en testimonio, á la Legislatura del Estado.

Hágase saber. El C. Juez interino de Distrito fallando en su fuero, así lo decretó y firmó, doy fé.—*Rodolfo Sanzonal.*—*Manuel Galindo*, secretario.

Sentencia del Tribunal de Circuito.

Puebla de Zaragoza, Marzo 18 de 1874.

Vistos los autos apelados de 11 y 26 de Diciembre del año anterior, dictados por el Juzgado de Distrito de Oaxaca, contra el Diputado D. Agustin Castañeda, declarándolo formalmente preso, sin la consignacion de su cámara á la autoridad; la expresion de agravios; el pedimento fiscal é informes á la vista.

Considerando: 1º Que la facultad de enjuiciar de plano en materia criminal á los miembros del poder legislativo de los Estados, no está conferida á los juzgados de Circuito y de Distrito, ni por su ley orgánica de 22 de Mayo de 1834, ni por la de 14 de Febrero de 1826, ni por alguna otra concordante con estas dos, pues hasta ahora, solo existen las constituciones particulares de cada entidad confederativa de la República, que determinan preclaramente el modo de encausar á dichos funcionarios, arts. 83 y 84 de la Constitucion de Oaxaca;

2º Que si el art. 103 de la Constitucion general, no comprendió entre los funciona-

rios que gozan fuero Constitucional á los representantes del pueblo en los Estados, no fué para someterlos desde luego á la justicia federal por sus faltas ó delitos en que la Union fuere parte, art. 97 fraccion 3ª de la Carta fundamental, sino por que los constituyentes tuvieron en cuenta la Soberanía de los mismos Estados, y quisieron que estos, previas las disposiciones legales dictadas para su régimen interior, hicieran la debida consignacion de aquellos funcionarios á la autoridad competente, para que de este modo no se concediera á los poderes federales mas facultades que las necesarias para el estricto cumplimiento de las funciones que le están encomendadas, etc. El Sr. Castillo Velasco, en sus «Lecciones de derecho Constitucional,» página 241.

3º Que los Estados, segun el Orden Constitucional, son partes integrantes de la federacion, y aquellos pueden existir sin esta; pero no al contrario, por cuya razon, la Soberanía Nacional no es mas que la misma Soberanía de los Estados, de donde se deduce la necesidad de guardar el fuero á los representantes de estos; *Ubi eadem est ratio, eadem debet esse juris dispositio*, L. 12 § de leg., lo que vá de acuerdo con lo dispuesto en los arts. 103, 104 y 126 de la Constitucion general, de ningun modo contrariado por los arts. 83 y 84 de la de Oaxaca, que previenen lo mismo para los funcionarios de aquel Estado, otorgándoles su fuero Constitucional.

4º Que precisamente porque los arts. acabados de citar, otorgan dicho fuero á los Diputados de aquella Legislatura, con él se garantiza la Soberanía de aquel Estado, por que el fuero Constitucional, no se ha establecido para las personas, y por esto impropriamente se llama fuero, sino en favor de la independencia y libertad de los diversos poderes á cuyo ejercicio contribuye el funcionario, y por consiguiente, su detencion ó prision pública, es un atentado contra el poder público, y una violacion de la Constitucion. El Sr. Castillo Velasco, en sus

TOMO VII.—PARTE II.

«Lecciones de derecho Constitucional,» página 228.

5º Que así como se aprehendió al Diputado Castañeda, sin la declaracion de la Legislatura á que pertenece, sobre haber ó no lugar para formarle causa, si se hubieran puesto en prision á la mayoría ó á todos los diputados de aquel lugar, esto hubiera dado por resultado, que un Juez ordinario federal, podia acabar de un golpe con un congreso, que no es otra cosa que el legítimo representante de un Estado Soberano; arts. 40 y 41 de la Constitucion general, lo que no puede concebirse en el sistema político, democrático de los países libres, como el nuestro.

6º Que el Estado de Oaxaca, por su órgano legal, podia muy bien alegar que se encuentra vulnerada su Soberanía en la persona de uno de sus representantes, siendo en tal caso ejercitable el recurso de amparo, con arreglo á la fraccion 2ª del art. 101 de la Constitucion; lo que no deben ocasionar los Tribunales de Circuito y de Distrito, una vez que esto redundaria en mengua de la justicia federal, que está constituida para garantizar, y no para vulnerar.

7º Que esta misma justicia puede y debe ejercitar su accion contra el que resulte culpable; pero despues el desafuero si es constitucionalmente aforado el que delinque, pues por ahora, ni el Juzgado de Distrito de Oaxaca, ni este Tribunal de Circuito, deben aplicar pena alguna, como la formal prision que está sufriendo el quejoso, por analogía ó por mayoría de razon; porque se harian acreedores á lo establecido en el art. 1044 del Código penal, y los Jueces deben estar mas dispuestos, en caso de duda, para absolver que para condenar; parte final de la ley 9ª, título 31, página 7ª.

Por estas consideraciones, y con fundamento especial de lo dispuesto en los arts. 117 de la Constitucion General, 182 del Código penal, de lo prevenido en la ley 2, tit. 16, lib. 11 de la N. R. y de lo que de-

terminan los arts. 83 y 84 de la Constitución de Oaxaca, ésta superioridad *falla*:

1º Se revocan los autos apelados de 11 y 26 de Diciembre del año anterior, dictados por el Juzgado de Distrito de Oaxaca, mientras no se haga la consignación del diputado D. Agustín Castañeda, por su legislatura respectiva, á la autoridad judicial

2º Póngase en libertad al apelante, y publíquese ésta resolución en el *Semanario Judicial* y en los periódicos oficiales de Puebla y de Oaxaca. Hágase saber. Así definitivamente juzgando, lo decretó y firmó el tercer Magistrado Suplente de éste Tribunal Superior de Circuito, por ante mí. Doy fé.—Gerardo Marquez.—Felipe de J. Almazan, secretario.

Pedimento del C. fiscal de la Suprema Corte de Justicia.

El Fiscal interino dice: que en 25 de Noviembre de 1870, se presentó ante el Juzgado de Distrito del Estado de Oaxaca, el C. Francisco Carranza, en representación de D. Agustín Castañeda, manifestando que este Señor por haber sido administrador de rentas de correos, era el inmediato responsable de los caudales que en su tiempo se recaudaron. Pero que en el deficiente que se había notado en dichos caudales, no había sido D. Agustín Castañeda quien los había dilapidado ni quien se había aprovechado de ellos, sino el Lic. D. Roman Robledo, el cual como interventor de la misma administración de correos y en virtud de la confianza que de él hizo su representado, manejó todos los fondos, manifestación que en su concepto estaba justificada con una escritura que acompañó; pidiendo por tal motivo, que el juzgado ordenara la correspondiente averiguación general. Practicada esta, y apareciendo responsable el Lic. Robledo, se dictó contra el auto de formal prisión.

Continuadas las diligencias, y conside-

rando el Juez de Distrito que había méritos suficientes, decretó por auto de 11 de Diciembre de 1873, la prisión formal contra D. Agustín Castañeda por peculado y falsedad. Notificado este auto al Sr. Castañeda, dijo que como contestación exhibía un escrito, y que además protestaba contra la providencia que se le notificaba, en virtud de violarse con ella el fuero constitucional que gozaba: que por lo mismo, con el debido respecto apelaba del auto.

En el escrito á que se refirió la contestación de Castañeda presentado con el objeto de ampliarla, aquel pretende demostrar, que el Juez de Distrito no tuvo jurisdicción para dictar la prisión, porque siendo Castañeda diputado á la Legislatura del Estado, solo podía encausársele, y por consecuencia, reducirse á prisión, previa declaración de la misma Legislatura; en virtud de que como diputado, gozaba del fuero constitucional. Agregando como un otro sí, que el personal del juzgado tenía enemistad profunda y pública con su patrono, cuya circunstancia, si no la tomaba en consideración el juzgado para inhibirse de seguir conociendo, se reservaba su derecho para cuando se decidiera el punto de competencia.

El Juzgado, previos los trámites respectivos, pronunció un auto en 26 de Octubre del año referido de 1873, declarando que no había lugar á la inhibición, y además, que el juzgado era competente para proceder contra el acusado D. Agustín Castañeda. Sustanciado el punto de apelación sobre el auto de formal prisión, aquella fué admitida solo en el efecto devolutivo, mandándose en consecuencia, testimonio de lo conducente al superior para que fallara lo que juzgara arreglado á derecho.

Elevados los autos al Tribunal de Circuito de Puebla, por recusación del Magistrado propietario y excusas del primero y segundo suplentes, pasó el conocimiento relativo á la apelación, al tercer suplente, quien fué recusado con causa por el Pro-

motor fiscal al hacérsele saber la radicación.

Notificado el auto que mandaba citar para resolver sobre la recusación, el Promotor contestó, que solo se daba por estado para la remisión del Toca á la Suprema Corte, á fin de que ella calificara la causa de la recusación. Sustanciado el artículo, por auto de 11 de Marzo del presente año, falló el Magistrado sobre la recusación, declarando que no procedía en derecho y señalando día para la vista del negocio. El Promotor suplicó de este auto; y no habiéndole admitido, interpuso el recurso de denegada súplica, pidiendo que se le extendiera el certificado que previene la ley de 18 de Marzo de 1840. Expedido el certificado, ocurrió á esta Suprema Corte, mejorando el recurso por medio de escrito presentado en 28 de Marzo del mismo año, todo lo que se mandó pasar al fiscal en 28 de Marzo del mismo año.

Después de expedido el certificado, el Magistrado de Circuito continuó sustanciando el recurso de apelación que se interpuso del auto de bien preso dictado contra D. Agustín Castañeda, cuyo recurso falló en 18 de Marzo del presente año, revocando la sentencia del Juez de Distrito.

Notificado el fallo al Promotor, interpuso el recurso de súplica que le fué admitida, remitiéndose en consecuencia, las diligencias á esta Suprema Corte, y las cuales se han pasado al Fiscal por la Secretaría de la 1ª Sala.

De la relación que se ha hecho, resulta que el punto sobre apelación, fué resultado antes de que se fallara el de denegada súplica, entablado por el Promotor del Tribunal de Circuito. Que el Magistrado de Circuito estuvo en su derecho para continuar conociendo de la apelación y haber fallado sobre ella, conforme al art. 39 de la ley de 18 de Marzo de 1840, y por último, que la resolución que ahora diera esta 1ª Sala en cuanto al recurso de denegada súplica, ningún resultado tendría en cuanto

al punto principal, puesto que ha sido fallado, y únicamente quedaría pendiente lo relativo á la responsabilidad del Magistrado de Circuito, caso de que se juzgara que había obrado mal al calificar y decidir el mismo sobre la recusación con causa.

Por estas razones, el que suscribe, cree que solo debe encargarse del punto principal, á saber, del auto de formal prisión decretado contra D. Agustín Castañeda. Este señor alegó al interponer la apelación, que el Juez de Distrito no podía encausarlo, ni por consecuencia, dictar el auto de prisión, en virtud de que siendo diputado á la Legislatura del Estado, gozaba del fuero constitucional que le concede el art. 88 de la Constitución del mismo Estado: que por este motivo, mientras la Legislatura no lo hubiera declarado con lugar á la formación de causa, ningún juez podía decretar contra el auto de formal prisión.

Como la presente causa se ha instruido por un delito federal, es necesario examinar si los diputados á la Legislatura de un Estado gozan el fuero constitucional en esta clase de delitos.

Para resolver esta cuestión, el que suscribe, cree oportunamente fijar bien las facultades de un congreso constituyente, reunido con el objeto de dar una Constitución general para toda la República, y las de una Legislatura que tuviera por fin único dar una constitución particular. El Congreso constituyente, al promulgar una constitución general, tiene incontestablemente facultad para fijar algunas condiciones ó bases en los procedimientos judiciales, aun respecto de delitos que estén sujetos á la legislación particular de un Estado.

El carácter de Congreso constituyente para todo el país, le dá sin duda ninguna aquella facultad. Por esto se ve, que la Constitución Federal de 1857 en su art. 20, determina algunas condiciones relativas á todo procedimiento criminal, ya sea en cuanto á delitos federales, ó ya en cuanto á los del orden común, sujetos exclusiva-

mente á la legislación particular de los Estados, cuando se cometen en ellos. En uso de la misma facultad que tuvo el Congreso constituyente, estableció por los arts. 104 y 105 de la referida Constitución, que los altos funcionarios que se mencionan en el art. 103, no podrán ser encausados por delitos del orden común, sino previa declaración del Congreso originado en Gran Jurado, de haber lugar á proceder contra el acusado; y en cuanto á delitos oficiales, solo podía conceder el Congreso como jurado de acusación, y la Suprema Corte de Justicia como jurado de sentencia. Las disposiciones contenidas en estos artículos y las que se expresan en el art. 20, son obligatorias á todo el país, porque la Constitución obliga á todos.

Segun éstas consideraciones, muy fundadas, á juicio del que suscribe, siempre que se trata de encausar á cualquiera de los funcionarios expresados en el art. 103 de la Constitución, aun cuando el delito sea de los que están sujetos á la exclusiva legislación de un Estado, no podrá procederse contra él, sin que previamente se haga por el Congreso de la Unión la declaración respectiva. Si un Juez dictara alguna providencia, sin el requisito referido, cometería un verdadero atentado.

Pero es de advertirse, que el fuero concedido por los arts. 104 y 105 ántes citados, como especial y excepcional, no pueden gozarlo, sino única y exclusivamente aquellos funcionarios á quienes expresamente se haya concedido; y como por el art. 103, se han expresado los funcionarios á cuyo favor se ha establecido, es indudable, que á éstos y solo á éstos, lo compete el fuero de que hablan los arts. 104 y 105 de la Constitución Federal. Como una consecuencia necesaria de lo que se ha expuesto, resulta que ningún diputado á cualquiera Legislatura de un Estado, puede acogerse al fuero constitucional otorgado por la Constitución Federal, supuesto que ésta no ha

comprendido á los diputados á las Legislaturas de los Estados, entre los funcionarios que deban gozar el fuero establecido por la misma Constitución.

Aplicando éstos principios al caso presente, es incuestionable que el acusado D. Agustín Castañeda, nunca puede hacer valer el fuero constitucional establecido por los arts. 104 y 105 citados; pero, ¿podría hacer valer el que le concede el art. 82 de la Constitución particular de Oaxaca?

En opinión del fiscal, no puede tener aplicación en el delito de que se acusa á D. Agustín Castañeda, el fuero establecido en el art. 82 expresado, y para fundar su opinión, examinará las facultades de las Legislaturas de los Estados al promulgar sus constituciones.

Las Legislaturas de los Estados, solo pueden legislar sobre delitos del orden común cometidos en el Estado, y sobre los delitos oficiales que se refieren única y exclusivamente á funcionarios y empleados del mismo Estado; pero de ninguna manera pueden hacerlo, ni en cuanto á delitos federales, ni en cuanto á delitos oficiales de funcionarios ó empleados de la Federación. No pudiendo legislar acerca de éstos delitos, nada, por consiguiente, pueden determinar respecto del procedimiento que deba seguirse en las acusaciones que por ellos se promuevan. Careciendo, pues, de ésta facultad, necesariamente carecen de la de fijar condiciones que se consideren indispensables para el procedimiento en los delitos federales; y como el fuero constitucional es una condición íntimamente enlazada con el procedimiento criminal, claro es, que no pudiendo las legislaturas decretar sobre procedimientos en delitos federales, tampoco pueden conceder fuero á ningún funcionario respecto de éstos delitos. Esto supuesto, y apareciendo de las diligencias remitidas á ésta 1ª sala que el delito porque se acusa á D. Agustín Castañeda es federal, resulta que no tiene aplicación el art. 82 de la Constitución particular del Estado de

Oaxaca al presente caso, y que, por consiguiente, no fué indispensable para decretar la prision contra el mismo Castañeda, que la Legislatura de Oaxaca, declarara previamente que habia lugar para proceder contra él.

En cuanto á la inhibicion que tambien alegó el acusado D. Agustin Castañeda, el que suscribe entiende que no debe encargarse de ella, tanto porque se espuso únicamente como excitativa hecha al Juez para que se escusara, como porque el acusado solo se reservó sus derechos, en caso de que el juez continuara conociendo del negocio, para despues que se decidiera la competencia del Juzgado.

Por estas consideraciones, el Fiscal concluye pidiendo que la Sala se sirva revocar la sentencia del Magistrado de Circuito de Puebla, y confirmar la del Juez de Distrito del Estado de Oaxaca, que decretó la formal prision del acusado D. Agustin Castañeda.

México, Setiembre 22 de 1874.—*L. Velazquez.*

Ejecutoria de la Suprema Corte de Justicia.

México, Febrero 4 de 1875.

Vistas las constancias relativas á la causa que por peculado se instruye contra D. Ramon Robledo y D. Agustin Castañeda, para el efecto de decidir sobre la súplica interpuesta por el C. Promotor fiscal del Tribunal de Circuito de Puebla, contra la sentencia pronunciada por ese Tribunal en 18 de Marzo del año próximo pasado, en la que fallando en lo conducente declaró:

«Primero, se revocan los autos apelados por (Castañeda), de 11 y 26 de Diciembre del año anterior, dictados por el Juzgado de Distrito de Oaxaca, por los que se declaró formalmente preso á dicho señor, mientras no se haga la consignacion del diputado D. Agustin Castañeda por su Le-

gislatura respectiva, á la autoridad judicial.»

«Segundo, póngase en libertad al apelante.»

Visto lo pedido ante esta 1ª Sala por el Fiscal interino, en apoyo de la determinacion del Juez de Distrito del Estado de Oaxaca, que decretó la formal prision de Castañeda; los apuntamientos de informes dejados en la Secretaría por el Lic. Manuel Dublan, como patrono de dicho encausado, con todo lo demás que de autos consta, se tuvo presente y ver convino.

Considerando: que el presente negocio debe resolverse, no segun las reglas del derecho criminal comun, sino conforme á los principios de nuestro derecho constitucional.

Que uno de los principios mas importantes de ese derecho, es el consignado en el art. 109 de la Constitucion de 5 de Febrero de 1857, conforme al cual es obligatorio para los Estados, la adopcion de la forma de Gobierno republicano representativo popular.

Que tal forma de Gobierno, requiere forzosamente que los cuerpos legislativos de los Estados tengan la firmeza y estabilidad necesarias para el desempeño de sus funciones.

Que para el aseguramiento de esa firmeza y de esa estabilidad, es requisito indispensable, el de que los diputados á las legislaturas de los Estados disfruten del fuero que, sin escepcion alguna, les otorgan sus respectivas constituciones, y que consiste en no poder ser juzgados, ni por los delitos comunes, ni por los delitos oficiales de que fueren acusados, sin que para los primeros declare previamente la Legislatura á que pertenecen, que há lugar á proceder contra ellos, y para los segundos que son culpables.

Que la garantía mencionada es indispensable, aun en el caso de ser acusados de delitos federales, porque de lo contrario, bastaria semejante acusacion para inhabi-

litarlos en el ejercicio de sus funciones, dándose así lugar al peligro inminente de dejar sin el número necesario á las Legislaturas de los Estados, y atentándose en consecuencia á la forma de Gobierno republicano, representativo popular, que les garantiza el art. 109 de la Constitución de 1857.

Que la circunstancia de no estar comprendidos los diputados á las Legislaturas de los Estados, entre los funcionarios de que habla el art. 103 de la Constitución de 1857, no afecta el presente caso, porque en él no se trata del fuero federal, sino del concedido en las constituciones particulares de los Estados, el cual debe estimarse bastante, según los fundamentos antes consignados, para que no se les pueda juzgar cuando fueren acusados de delitos federales, sino previa declaración de la Legislatura respectiva, de haber lugar á formación de causa.

Que para la privación del fuero concedido en las constituciones de los Estados, no es motivo suficiente el que las Legislaturas de estos, no puedan legislar, ni en cuanto á delitos federales, ni en cuanto á delitos oficiales de funcionarios y empleados de la federación, en virtud de que tampoco se trata en el punto que se viene dilucidando, de que las Legislaturas de los Estados legislen sobre materias que no son de su incumbencia, sino única y sencillamente de que se suspenda la acción judicial contra los diputados á una Legislatura acusados de delitos federales, por el tiempo que dure el fuero constitucional de que disfrutan, no en beneficio propio, sino como un medio eficaz de garantizar á los Estados su forma representativa de Gobierno.

Que si bien es indudable que pueden resultar inconvenientes, y entre ellos, algunos de notoria gravedad, de la concesión de todo fuero; ese mal es de pequeña importancia, comparado con el muy grande que resultaría de no conceder ó de nulificar el fuero constitucional concedido á los altos funcionarios de la federación y de los Estados, el

cual afecta tan directamente la esencia de las instituciones adoptadas por la República Mexicana.

Que el art. 102 de la Constitución de 1857, del que emanan todas las anteriores consideraciones, es obligatorio, no solamente para los Estados, sino también para los Supremos poderes de la Federación, y en especial para la Corte de Justicia, cuyo principal deber es velar por la incolumidad de nuestro Código Político.

Que aplicando los precedentes fundamentos al caso sobre que se falla, resulta, que amparado el C. Agustín Castañeda por el art. 83 de la Constitución del Estado de Oaxaca, no se ha podido decretar contra él, auto de formal prisión, sin previa declaración de la Legislatura, de haber lugar á la formación de causa.

Por tales consideraciones y fundamentos, se decreta: que es de confirmar y se confirma la sentencia del Tribunal de Circuito de Puebla, por lo que se revocó el auto de formal prisión decretado por el Juzgado de Distrito de Oaxaca contra el C. Agustín Castañeda.

Remítase copia certificada de esta sentencia al Tribunal de Circuito de Puebla, previniéndole remita las actuaciones á la Legislatura del Estado de Oaxaca para los fines consiguientes: remítase copia igual á la expresada Legislatura para su conocimiento: hágase saber y archívese á su vez el Toca.

Así por unanimidad de votos lo decretaron los CC. Presidente y Ministros que formaron la primera Sala de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos, y firmaron:—*J. M. Iglesias.*—*Juan J. de la Garza.*—*Ignacio M. Altamirano.*—*Ignacio Ramírez.*—*S. Guzmán.*—*Luis M. Aguilar*, secretario.

Son copias. México, Febrero 18 de 1875.
—*A. M. Gómez Ugarte.*